

No. 39835

**Paraguay
and
Bolivia**

Agreement between the Republic of Paraguay and the Republic of Bolivia on the promotion and reciprocal protection of investments. Asunción, 4 May 2001

Entry into force: *4 September 2003 by notification, in accordance with article 12*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Paraguay, 16 January 2004*

**Paraguay
et
Bolivie**

Accord entre la République du Paraguay et la République de Bolivie relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements. Asunción, 4 mai 2001

Entrée en vigueur : *4 septembre 2003 par notification, conformément à l'article 12*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Paraguay, 16 janvier 2004*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**ACUERDO ENTRE
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Y
LA REPÚBLICA DE BOLIVIA
SOBRE
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES**

El Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República de Bolivia, en adelante denominados "PARTES CONTRATANTES".

DESEANDO intensificar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambos Estados;

CON INTENCIÓN de crear y mantener condiciones favorables a las inversiones de inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante;

RECONOCIENDO la necesidad de promover y proteger las inversiones extranjeras, con el propósito de favorecer la prosperidad económica de ambos Estados,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE

**ARTÍCULO 1
DEFINICIONES**

A los fines del presente Acuerdo:

1. El término "Inversión" comprende todo tipo de activos colocados por un inversor de una Parte Contratante en el Territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con la legislación de esta última.

El término comprende en particular, aunque no exclusivamente

- (a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como hipotecas, gravámenes, derechos de prenda y derechos similares.
- (b) Acciones, valores bursátiles, títulos o derechos de participación en sociedades o cualesquiera otras formas de participación en sociedad, así como los intereses económicos resultantes de la respectiva actividad.
- (c) Los títulos de créditos y derechos a cualquier tipo de prestación de valor económico. Los préstamos estarán incluidos solamente cuando estén directamente vinculados a una inversión extranjera directa;
- (d) Derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y derechos conexos, derechos de propiedad industrial tales como: signos distintivos, patentes, diseños y dibujos industriales, y obtentores de variedades vegetales.
- (e) Las concesiones económicas otorgadas, por ley o contrato, por las Partes Contratantes para el ejercicio de una actividad económica, incluidas las concesiones de prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales

Cualquier modificación en la forma de realización de las inversiones no afectará su calificación como inversión, siempre que dicha modificación sea efectuada de acuerdo a

la legislación de la Parte Contratante en el territorio en la cual la inversión haya sido realizada

2. El término "Inversor" designa:

- a) Toda persona física que sea nacional de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación. Las disposiciones de este Acuerdo no se aplicarán a las inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, si tales personas, a la fecha de la inversión, residiesen en forma permanente o se domiciliaren en esta última Parte Contratante, a menos que se pruebe que los recursos referidos a estas inversiones provienen del exterior
- b) Toda persona jurídica constituida de conformidad con las leyes y reglamentos de una Parte Contratante y que tenga su sede principal en el territorio de dicha Parte Contratante
- c) Las personas jurídicas establecidas en el territorio donde se realiza la inversión, efectivamente controladas, directa o indirectamente por personas físicas o jurídicas definidas en 2 a) y b).

3. El término "Renta" designa a las sumas obtenidas por una inversión realizada de conformidad con este Acuerdo, tales como utilidades, ganancias, dividendos, intereses, regalías, otros ingresos corrientes y cualquier otra utilidad proveniente del excedente de explotación

4. El término "Territorio" designa a la extensión territorial sobre la cual cada una de las Partes Contratantes ejerce su soberanía o jurisdicción conforme al Derecho Internacional y su Constitución Nacional.

ARTÍCULO 2 AMBITO DE APLICACIÓN

El presente Acuerdo será aplicado a las inversiones en el territorio de una de las Partes Contratantes, realizadas de conformidad con su legislación, antes o después de la entrada en vigencia de este Acuerdo. Sin embargo, el presente Acuerdo no será aplicado a controversia, reclamo o diferendo alguno que se hubiese originado con anterioridad a su entrada en vigor.

ARTÍCULO 3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Cada Parte Contratante promoverá en su territorio, en la medida de lo posible, las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones conforme a su legislación

La Parte Contratante que haya admitido una inversión en su territorio, otorgará los permisos necesarios en relación a dicha inversión, incluyendo la ejecución de contratos de licencia y asistencia técnica, comercial o administrativa.

Cada Parte Contratante facilitará, cuando así se requiera, los permisos necesarios para las actividades de consultores o de otras personas calificadas de nacionalidad extranjera conforme a la legislación y disposiciones relativas a la entrada y estadía de los mismos.

incluyendo los permisos necesarios para la entrada y permanencia en el territorio de los integrantes de su familia.

ARTÍCULO 4
PROTECCIÓN DE INVERSIONES,
TRATO NACIONAL Y DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

1. Cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones efectuadas según su legislación por los inversores de la otra Parte Contratante y no obstaculizará con medidas injustificadas o discriminatorias la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute, el desarrollo, la venta y si fuera el caso, la liquidación de dichas inversiones.
2. Cada Parte Contratante garantizará en su territorio un trato justo y equitativo para las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante. Este trato no será menos favorable del que se conceda a las inversiones de sus propios inversores o a las inversiones de inversores de terceros Estados.
3. El tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que una Parte Contratante acuerde a los inversores de un tercer Estado en virtud de su participación, o asociación, presente o futura, en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común o acuerdo regional similar.
4. El trato acordado por el presente artículo no se refiere a las ventajas que una de las Partes Contratantes conceda a los inversores de terceros Estados como consecuencia de un acuerdo para evitar la doble imposición o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios.
5. Las medidas que se adopten con carácter general por razones de orden público, seguridad o salud pública, no se considerarán como tratamiento menos favorable en el sentido del presente artículo.

ARTÍCULO 5
TRANSFERENCIA

1. Cada Parte Contratante, en cuyo territorio inversores de la otra Parte Contratante hayan efectuado inversiones, garantizará a estos, de conformidad con las disposiciones internacionales sobre la materia, la libre transferencia de los pagos relacionados con esas inversiones, en particular aunque no exclusivamente de:
 - (a) Rentas;
 - (b) Amortizaciones de préstamos vinculados a una inversión;
 - (c) Importes destinados a cubrir los gastos relativos a la administración de las inversiones;
 - (d) La contribución adicional de capital necesario para el mantenimiento o desarrollo de las inversiones;
 - (e) El producto de la venta o de la liquidación parcial o total de una inversión;
 - (f) Las compensaciones, e indemnizaciones previstas en los artículos 6 y 7,
 - (g) Cualquier pago preliminar que pueda haber sido efectuado en nombre del inversor de acuerdo al artículo 8 del presente Acuerdo;
 - (h) Reinversiones ampliatorias.
2. Las transferencias arriba mencionadas serán efectuadas sin demora, en moneda libremente convertible a la tasa de cambio aplicable a la fecha de la transferencia, de

conformidad con la legislación vigente de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión

3. Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 1 y 2, cada Parte Contratante podrá impedir una transferencia a objeto de proteger los derechos de acreedores o asegurar el cumplimiento de decisiones firmes emitidas en procesos judiciales o arbitrales, a través de una aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes y reglamentos, incluyendo en particular aunque no exclusivamente:

- (a) Quiebra o insolvencia,
- (b) Infracciones penales;
- (c) Garantía del cumplimiento de los mandamientos o fallos en actuaciones judiciales;
- (d) Incumplimiento de obligaciones laborales;
- (e) Derechos Sociales;
- (f) Incumplimiento de obligaciones tributanas.

ARTÍCULO 6 EXPROPIACIÓN Y COMPENSACIÓN

1. Ninguna de las Partes Contratantes adoptará directamente, medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza o efecto, contra las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, excepto por causas de utilidad pública o de interés social y a condición de que dichas medidas no sean discriminatorias, y que den lugar al pago previo de una indemnización justa, conforme a las disposiciones legales vigentes y bajo el debido proceso legal.

2. La indemnización deberá corresponder al valor de mercado de la inversión expropiada, inmediatamente antes de la expropiación o inmediatamente antes del momento en que la expropiación haya sido de conocimiento público. La indemnización deberá abonarse previamente, en moneda libremente convertible.

3. El inversionista afectado tendrá derecho a que la justa indemnización sea establecida por sentencia de la autoridad judicial competente del Estado expropiante.

ARTÍCULO 7 COMPENSACIONES POR PERDIDAS

Los inversores de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante a consecuencia de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, rebelión, insurrección o motín en el territorio de la otra Parte Contratante, recibirán en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un trato no menos favorable que el acordado a sus propios inversores.

ARTÍCULO 8 SUBROGACIÓN

Cuando una Parte Contratante o una de sus agencias autorizadas haya acordado una garantía o seguro para cubrir los riesgos no comerciales con relación a una inversión efectuada por uno de sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última Parte Contratante reconocerá la subrogación de la primera Parte Contratante o sus agencias autorizadas en los mismos derechos del inversor reconocidos por la ley de

la parte receptora de la inversión, siempre y cuando la primera Parte Contratante haya efectuado un pago en virtud de dicha garantía y la otra Parte Contratante exprese su conformidad.

ARTÍCULO 9
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN
INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

1. Toda controversia relativa a las disposiciones del presente Acuerdo respecto de una inversión entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, será, en la medida de lo posible, solucionada mediante consultas amistosas
2. Si estas consultas no permiten solucionar la controversia en un plazo de seis meses, a partir de la fecha de la notificación escrita, cualquiera de las partes podrá someter la disputa a la:
 - a) jurisdicción nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, o bienal;
 - b) arbitraje internacional. En este caso las partes tendrán cualquiera de las siguientes opciones:
 - b I) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto a la firma en Washington D.C., el 18 de marzo de 1965.
 - b II) un tribunal Ad Hoc, que será establecido bajo las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).
3. Una vez aceptada expresamente por la otra parte, y sometido el diferendo a uno de los procedimientos citados en los incisos a), bI) y bII), del numeral anterior, la selección será definitiva.
4. La Parte Contratante que sea parte de una controversia en ningún momento, durante los procedimientos, podrá utilizar en su defensa su inmunidad o el hecho que el inversor haya recibido una compensación, por contrato de seguro, indemnizando la totalidad o parte de los daños o pérdidas incurridas.
5. El tribunal arbitral podrá decidir en base al presente Acuerdo y a otros Acuerdos relevantes entre las Partes Contratantes; a los términos de algún acuerdo específico que pueda ser concluido con relación a la inversión; a la ley de la Parte Contratante que sea parte en la controversia, inclusive sus normas sobre conflicto de leyes; aquellos principios y normas del Derecho Internacional que fueran aplicables.
6. Las decisiones del tribunal son definitivas y obligatorias para las Partes en controversia. Cada Parte Contratante las ejecutará de conformidad con su legislación.

ARTÍCULO 10
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

1. Las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o a la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo se resolverán mediante negociaciones por vía diplomática.
2. Si las Partes Contratantes no llegan a un acuerdo dentro de los seis meses contados a partir de la iniciación de la controversia, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de ellas, a un tribunal arbitral compuesto de tres miembros. Cada Parte Contratante designará un árbitro, y ambos árbitros así designados nombrarán al presidente del tribunal, que deberá ser nacional de un tercer Estado.
3. Si una de las Partes Contratantes no hubiera designado su árbitro y no diera respuesta a la invitación de la otra Parte Contratante de efectuar ésta designación dentro de dos meses, el árbitro será designado, a solicitud de ésta última Parte Contratante, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
4. Si los dos árbitros no logran llegar a un acuerdo sobre la elección del Presidente en el plazo de dos meses siguientes a su designación, este último será designado, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
5. Si, en los casos previstos en los párrafos (3) y (4) del presente artículo, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia estuviera impedido de realizar dicha función, o si fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, las designaciones serán realizadas por el Vicepresidente y si este último estuviera impedido, o si fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, los nombramientos serán realizados por el Juez de la Corte de mayor antigüedad que no sea nacional de cualquiera de las Partes Contratantes.
6. El Tribunal Arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Cada Parte Contratante sufragará los gastos de su árbitro y de su representación en el procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, así como los demás gastos serán sufragados, en principio, por partes iguales, por las Partes Contratantes.
7. El propio tribunal determinará su procedimiento.
8. Las decisiones del tribunal son definitivas y obligatorias para las Partes Contratantes.

ARTÍCULO 11
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Cada Parte Contratante respetará en todo momento todas las obligaciones contraídas con respecto de las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante.

Si las disposiciones de la legislación de cualquier Parte Contratante o las obligaciones del Derecho Internacional existentes o que se establezcan en el futuro entre las Partes Contratantes, en adición al presente Acuerdo, contienen una reglamentación general o especial que confiriera a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente Acuerdo.

Toda expresión que no esté definida en el presente Acuerdo tendrá el sentido utilizado en la legislación vigente en cada Parte Contratante

**ARTÍCULO 12
VIGENCIA, DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL ACUERDO**

El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días siguientes de la fecha de la última notificación en la cual las Partes Contratantes se hayan notificado recíprocamente por escrito y por la vía diplomática, que se ha cumplido con los procedimientos constitucionales necesarios para su aprobación en sus respectivos países y permanecerá en vigencia por un periodo de diez (10) años

En caso que cualquiera de las Partes Contratantes decida dar por terminado este Acuerdo, deberá notificar por escrito y por la vía diplomática su decisión, a la otra Parte, por lo menos doce (12) meses antes de la fecha de expiración de su actual vigencia. De lo contrario, el presente Acuerdo se prorrogará por tiempo indefinido. En esta etapa las Partes podrán notificarse la decisión de dar por terminado este Acuerdo, en cualquier momento, por escrito y por la vía diplomática. Se hará efectiva la terminación del Acuerdo doce (12) meses después de la notificación escrita.

Con relación a aquellas inversiones hechas antes de la fecha de terminación de este Acuerdo, los artículos 1 al 11, precedentes del mismo, continuarán en vigor por un periodo de 10 años a partir de esa fecha

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Acuerdo

Hecho en Asunción, el día 4 del mes de mayo de 2001 en el idioma español, siendo los dos textos igualmente auténticos.


POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY

POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE BOLIVIA

[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF PARAGUAY AND THE REPUBLIC OF BOLIVIA ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Republic of Bolivia, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both States,

Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

Recognizing the need to promote and protect foreign investments with the aim of fostering the economic prosperity of both States,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" means any kind of asset invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party pursuant to the legislation of the latter.

In particular, although not exclusively, the term shall include:

(a) Movable and immovable property and other property rights, such as mortgages, liens, pledges and similar rights;

(b) Stock, traded securities, certificates or shares in companies or any other forms of equity in companies as well as the economic interests arising from the business activity;

(c) Claims to sums of money and rights to any performance having an economic value; loans shall be included only when they are directly linked to specific foreign direct investments;

(d) Intellectual property rights; copyrights and associated rights, industrial property rights such as distinctive marks, patents, industrial designs and drawings and rights to plant varieties;

(e) Economic concessions conferred by law or by contract by the Contracting Parties for the exercise of an economic activity, including concessions to prospect for, cultivate, extract or exploit natural resources.

Any change in the form in which investments are made shall not affect their status as investments, provided that such changes are made in accordance with the applicable legislation of the Contracting Party in whose territory the investment has been made.

2. The term "investor" means:

(a) Any natural person who is a national of either Contracting Party pursuant to its legislation. The provisions of this Agreement shall not apply to investments made by natural

persons who are nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party if, at the time of the investment, those persons are permanently residing or domiciled in the latter, unless it can be shown that the resources involved in the investment originated outside the Contracting Party;

(b) Any legal person constituted pursuant to the applicable laws and regulations of a Contracting Party and having its head office in the territory of that Contracting Party;

(c) Legal persons constituted in the territory where the investment is made which are under the effective control, directly or indirectly, of natural or legal persons as defined in paragraphs 2 (a) and (b).

3. The term "returns" means the amounts yielded by an investment made in accordance with this Agreement, such as profits, earnings, dividends, interest, royalties, other regular income and any other profits from operating surplus.

4. The term "territory" means the land area over which each Contracting Party exercises sovereignty or jurisdiction in accordance with international law and its national constitution.

Article 2. Scope of application

The present Agreement shall apply to investments in the territory of one of the Contracting Parties made in accordance with its legislation before or after the entry into force of this Agreement. It shall not, however, be applicable to any disputes, claims or disagreements which arose prior to its entry into force.

Article 3. Promotion of investments

Each Contracting Party shall, within its territory, promote, as far as possible, investments by investors of the other Contracting Party and shall admit such investments in accordance with its legislation.

When a Contracting Party has admitted an investment into its territory, it shall grant the necessary permits in connection with such an investment, including the execution of licensing agreements and contracts for technical, commercial or administrative assistance.

Each Contracting Party shall, when necessary, facilitate the issuance of the necessary authorizations for the activities of consultants or other qualified persons of foreign nationality in accordance with the relevant legislation and provisions concerning their entry and stay, including the necessary authorizations for the entry and stay of their family members.

Article 4. Protection of investments, national and most-favoured-nation treatment

1. Each Contracting Party shall, within its territory, protect investments made in accordance with its legislation by investors of the other Contracting Party and shall not hinder by unjustified or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, development, sale and, where appropriate, liquidation of such investments.

2. Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory of the investments made by investors of the other Contracting Party. This treatment shall

not be less favourable than that accorded to investments made by its own investors or to investments made by investors of third States.

3. Most-favoured-nation treatment shall not include privileges granted by either Contracting Party to investors of a third State by virtue of its present or future membership in or association with a free trade area, customs union, common market or similar regional agreement.

4. The treatment accorded under this article shall not refer to privileges granted by either Contracting Party to investors of third States by virtue of a double taxation agreement or other agreements regarding matters of taxation.

5. Measures of a general nature adopted for reasons of public order, safety or public health shall not be regarded as less favourable treatment within the meaning of this article.

Article 5. Transfer

1. Each Contracting Party in whose territory investments have been made by investors of the other Contracting Party shall guarantee those investors, in accordance with the relevant provisions of international law, the free transfer of the payments relating to the investments, including in particular but not limited to:

- (a) Returns;
- (b) Repayments of loans in connection with an investment;
- (c) Amounts allocated to cover expenses relating to the management of the investments;
- (d) Additional contributions of capital necessary for the maintenance or development of the investments;
- (e) Proceeds from the sale or the partial or total liquidation of an investment;
- (f) Compensation and indemnification as provided for under articles 6 and 7;
- (g) Any preliminary payment that may have been made on behalf of the investor in accordance with article 8 of this Agreement;
- (h) Supplementary reinvestments.

2. The aforementioned transfers shall be made without delay in freely convertible currency at the exchange rate applicable on the date of the transfer, in accordance with the current legislation of the Contracting Party in whose territory the investment was made.

3. Without prejudice to the provisions of paragraphs 1 and 2, each Contracting Party may prevent a transfer in order to protect the rights of creditors or to ensure compliance with official rulings handed down in legal or arbitration proceedings through the application, in an equitable and non-discriminatory manner and in good faith, of its laws and regulations, relating in particular but not exclusively to:

- (a) Bankruptcy or insolvency;
- (b) Criminal offences;
- (c) Guarantees of compliance with judicial orders or decisions;
- (d) Failure to comply with labour obligations;

- (e) Social rights;
- (f) Failure to comply with tax obligations.

Article 6. Expropriation and compensation

1. Neither Contracting Party shall take direct expropriation or nationalization measures or any other measures of a similar nature or having a similar effect against investments of investors of the other Contracting Party, unless they are taken for the public benefit or in the social interest and provided that such measures are non-discriminatory and make provision for the payment of fair compensation, in accordance with the legislation in force and with due process of law.

2. Compensation must correspond to the market value of the expropriated investment immediately prior to the expropriation or immediately before the expropriation became public knowledge. Compensation must be paid in advance in freely convertible currency.

3. The investor concerned shall be entitled to have fair compensation determined by a decision of the competent judicial authority of the expropriating State.

Article 7. Compensation for losses

Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, rebellion, insurrection or riot in the territory of the other Contracting Party shall be accorded treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other redress, no less favourable than that accorded to its own investors.

Article 8. Subrogation

If a Contracting Party or one of its authorized agencies has granted a guarantee or insurance against non-commercial risks in respect of an investment made by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize the right of the first Contracting Party or its authorized agencies to be subrogated to the rights of the investor as recognized under the legislation of the Contracting Party receiving the investment, provided that the first Contracting Party has made a payment under that guarantee and that the other Contracting Party expresses its consent.

Article 9. Settlement of disputes between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party

1. Any disputes relating to the provisions of this Agreement with respect to an investment between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall, as far as possible, be settled through amicable consultations.

2. If these consultations do not result in a solution within six months from the date of the written notification, either of the parties may submit the dispute to:

(a) The national jurisdiction of the Contracting Party in whose territory the investment has been made; or

(b) International arbitration; in this case, the parties shall have the choice between:

(i) The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, opened for signature at Washington D.C. on 18 March 1965;

(ii) An ad hoc tribunal constituted in accordance with the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

3. Once the other party has expressly accepted the choice and the dispute has been submitted to one of the procedures described in paragraphs 2 (a), (b) (i) and (b) (ii) above, the choice shall be definitive.

4. A Contracting Party that is a party to a dispute may not, at any time during the procedures, assert as a defence its immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.

5. The arbitral tribunal shall decide on the basis of the present Agreement and other relevant agreements between the Contracting Parties; the terms of any particular agreement that may have been concluded with respect to the investment; the law of the Contracting Party that is a party to the dispute, including its rules on the conflict of laws; and such principles and rules of international law as may be applicable.

6. The decisions of the tribunal shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party shall implement them in accordance with its legislation.

Article 10. Settlement of disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled by negotiation through the diplomatic channel.

2. If the Contracting Parties cannot reach an agreement within six months after the beginning of the dispute, the matter shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal composed of three members. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator, and these two arbitrators shall nominate a chairman, who shall be a national of a third State.

3. If one of the Contracting Parties has not appointed its arbitrator and has not responded to the invitation of the other Contracting Party to make that appointment within two months, the arbitrator shall be appointed, upon the request of that Contracting Party, by the President of the International Court of Justice.

4. If the two arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the chairman within two months after their appointment, the chairman shall be appointed, upon the request of either Contracting Party, by the President of the International Court of Justice.

5. If, in the cases specified in paragraphs 3 and 4 of this article, the President of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if he or she is a national of either Contracting Party, the appointments shall be made by the Vice-

President, and if the latter is prevented from doing so or if he or she is a national of either Contracting Party, the appointments shall be made by the most senior judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.

6. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs shall, in principle, be borne in equal parts by the Contracting Parties.

7. The tribunal shall determine its own procedures.

8. The decisions of the tribunal shall be final and binding on the Contracting Parties.

Article 11. Additional provisions

Each Contracting Party shall observe at all times all the commitments it has entered into with respect to the investments of investors of the other Contracting Party.

If, either now or in the future, the legislation of either Contracting Party or the mutual obligations of the two Contracting Parties arising from international law apart from this Agreement contain a general or specific rule under which investments of investors of the other Contracting Party are granted more favourable treatment than the treatment provided for in this Agreement, such a rule shall prevail over this Agreement.

Any terms not defined in this Agreement shall have the meanings used in the applicable legislation of each Contracting Party.

Article 12. Entry into force, duration and termination of the Agreement

This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the last written notification in which the Contracting Parties have notified each other, in writing and through the diplomatic channel, that they have fulfilled the constitutional requirements for the approval of the Agreement in their respective countries and shall remain in force for a period of ten (10) years.

In the event that either Contracting Party decides to terminate this Agreement, it must notify the other Contracting Party of its decision in writing through the diplomatic channel at least twelve (12) months prior to its current expiry date. Otherwise, this Agreement shall be renewed for an indefinite period. At that stage, the Contracting Parties may notify each other at any time, in writing and through the diplomatic channel, of their decision to terminate it. The Agreement shall be terminated twelve (12) months after such written notification.

With respect to investments made before the date of termination of this Agreement, articles I to II thereof shall remain in force for a period of 10 years from that date.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized for this purpose by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Asunción on 4 May 2001, in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Paraguay:

For the Government of the Republic of Bolivia:

[TRANSLATION — TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LA RÉPUBLIQUE
DE BOLIVIE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉ-
CIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République de Bolivie, ci-après dénommés les "Parties contractantes",

Désireux d'intensifier la coopération économique pour l'avantage réciproque des deux États,

Souhaitant créer et établir des conditions favorables pour les investissements réalisés par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre,

Constatant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de favoriser la prospérité économique des deux États,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord:

1. Le terme "investissements" désigne tous types d'actifs apportés par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre, conformément à la législation de cette dernière.

Le terme englobe en particulier mais pas exclusivement:

a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits de propriété tels que les hypothèques, nantissements, droits de gage ou autres droits similaires;

b) les actions, les parts sociales et les obligations des sociétés ou tout autre droit ou intérêt dans lesdites sociétés, ainsi que les intérêts économiques résultant de l'activité commerciale;

c) les créances et tous droits à prestations ayant une valeur économique liée à un investissement étranger spécifique;

d) les droits de propriété intellectuelle, notamment droits d'auteur, marques de fabrique ou brevets, plans industriels et autres plans et droits à des variétés végétales;

e) les concessions commerciales ayant une valeur économique accordée par la loi ou par contrat, y compris les concessions en vue de la prospection, de la culture, de l'extraction ou de l'exploitation de ressources naturelles.

Toutes les modifications de la forme sous laquelle les actifs seront investis seront sans effet sur leur caractère d'investissements à condition que ces modifications soient conformes à la législation applicable de la Partie contractante, sur le territoire de laquelle les investissements ont été effectués.

2. Le terme "investisseur" désigne:

a) toute personne physique qui est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, conformément à sa législation. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas aux investissements réalisés par des personnes physiques qui sont des ressortissants d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre si, au moment de l'investissement, lesdites personnes résidaient d'une façon permanente ou étaient domiciliées de façon permanente dans cette dernière, sauf s'il peut être prouvé que les ressources impliquées dans l'investissement avaient leur origine en dehors de la Partie contractante intéressée;

b) toute personne morale constituée conformément à la législation et à la réglementation applicables d'une Partie contractante et qui a son siège sur le territoire de ladite Partie contractante;

c) des personnes morales constituées sur le territoire où l'investissement est réalisé et qui sont sous le contrôle effectif, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales telles que définies aux alinéas a) et b) du paragraphe 2.

3. Le terme "revenus" désigne les montants accumulés grâce à un investissement effectué conformément aux dispositions du présent Accord, tels que bénéfices, recettes, dividendes, intérêts, redevances, autre revenu régulier et tout autre profit provenant des bénéfices d'exploitation.

4. Le terme "territoire" désigne la superficie terrestre sur laquelle chaque Partie contractante exerce sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international et à sa constitution nationale.

Article 2. Champ d'application

Le présent Accord s'applique aux investissements réalisés sur le territoire d'une des Parties contractantes, effectués conformément à sa législation avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord. Il ne s'applique cependant pas aux différends, réclamations ou désaccords survenus avant son entrée en vigueur.

Article 3. Promotion des investissements

Chaque Partie contractante favorise sur son territoire et dans toute la mesure du possible les investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet lesdits investissements conformément à sa législation.

Lorsqu'une Partie contractante admet un investissement sur son territoire, elle délivre, en conformité avec ses lois et règlements, les permis nécessaires en rapport avec cet investissement et avec l'exécution des contrats de licence et d'assistance technique, commerciale ou administrative.

Chaque Partie contractante s'efforce d'accorder en tant que de besoin les autorisations demandées en rapport avec les activités des consultants ou du personnel spécialisé de nationalité étrangère, conformément aux dispositions pertinentes de sa législation et à celles concernant leur entrée et leur séjour, y compris les autorisations nécessaires pour l'entrée et le séjour des membres de leurs familles.

Article 4. Protection des investissements, traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

1. Chaque Partie contractante protège les investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante, conformément à sa législation, et n'entrave pas par des mesures injustifiées ou discriminatoires la gestion, l'entretien, l'exploitation, la jouissance, la cession ou, le cas échéant, la liquidation desdits investissements.

2. Chaque Partie contractante accorde un traitement juste et équitable aux investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante. Le traitement en question n'est pas moins favorable que celui accordé aux investissements réalisés par ses propres investisseurs et à ceux effectués par des investisseurs d'États tiers.

3. Le traitement de la nation la plus favorisée n'englobe pas les privilèges accordés par l'une ou l'autre Partie contractante à des investisseurs d'un État tiers en vertu de son adhésion ou de son association actuelle ou future à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou un accord régional similaire.

4. Le traitement accordé aux termes du présent article ne mentionne pas les privilèges accordés par l'une ou l'autre Partie contractante à des investisseurs d'États tiers en vertu d'un accord visant à éviter la double imposition ou tous autres accords de caractère fiscal.

5. Les mesures de caractère général adoptées pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique ne sont pas considérées comme un traitement moins favorable au sens du présent article.

Article 5. Transferts

1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle les investissements ont été faits par des investisseurs de l'autre Partie contractante, garantit aux intéressés, conformément aux dispositions du droit international, le libre transfert des paiements liés aux investissements, y compris en particulier mais non limités à:

- a) des revenus;
- b) des remboursements de prêts liés à un investissement;
- c) des montants prévus pour couvrir les dépenses liées à la gestion des investissements;
- d) des contributions supplémentaires de fonds nécessaires pour l'entretien ou l'expansion des investissements;
- e) au produit des ventes ou à la liquidation totale ou partielle d'un investissement;
- f) aux compensations et indemnités prévues aux articles 6 et 7;
- g) à tout versement préliminaire qui peut avoir été fait au nom de l'investisseur, conformément à l'article 8 du présent Accord;
- h) à des réinvestissements supplémentaires.

2. Les transferts mentionnés ci-dessus sont effectués sans retard en monnaie librement convertible au taux de change applicable à la date du transfert, conformément à la législation courante de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été fait.

3. Sans préjuger des dispositions des paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante peut empêcher un transfert afin de protéger les droits des créanciers et assurer le respect des règlements officiels ou des mesures adoptées en rapport avec des infractions pénales ou en exécution de décisions rendues dans le cadre de procédures administratives et judiciaires, mesures qui sont prises et appliquées de manière équitable et non discriminatoire et en toute bonne foi, liées notamment mais non exclusivement aux points suivants:

- a) banqueroutes ou insolvabilité;
- b) infractions pénales;
- c) garantie de conformité aux décisions judiciaires;
- d) non respect des obligations professionnelles;
- e) droits sociaux;
- f) manquement aux obligations fiscales.

Article 6. Expropriation et compensation

1. Aucune des Parties contractantes ne prend des mesures directes d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure de caractère similaire ou ayant un effet similaire à l'encontre des investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante, sauf pour raisons d'intérêt public ou dans l'intérêt social et à condition que ces mesures n'aient pas un caractère discriminatoire et contiennent des dispositions pour le versement d'une compensation honnête, conformément à la législation en vigueur et à son application.

2. La compensation doit correspondre à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant ladite expropriation ou immédiatement avant qu'une expropriation en instance devienne de notoriété publique. Ladite compensation doit être versée en avance en devises librement convertibles.

3. L'investisseur intéressé a droit à une compensation honnête, déterminée par une décision d'un organisme judiciaire compétent de l'État qui procède à l'expropriation.

Article 7. Indemnisation pour pertes

Les investisseurs de l'une des Parties contractantes, dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes en raison d'une guerre ou autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence nationale, d'une révolte, d'une insurrection ou d'une émeute découlant d'une mesure arbitraire des autorités du territoire de l'autre Partie contractante, se voient accorder par cette dernière un traitement en matière de restitution, d'indemnisation ou de compensation ou autre forme de règlement qui n'est pas moins favorable que celui accordé par ladite Partie contractante à ses propres investisseurs.

Article 8. Subrogation

Lorsqu'une Partie contractante, ou un de ses organismes habilités, a accordé une garantie ou une assurance pour risques non commerciaux au sujet d'un investissement réalisé par un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière reconnaît le droit de la première Partie contractante ou de son organisme habilité à faire valoir par subrogation les droits de l'investisseur tels que reconnus par la législation de la Partie contractante qui a bénéficié de l'investissement, à condition que la première Partie contractante ait fait un versement en titre de garantie et que l'autre Partie contractante ait exprimé son consentement.

Article 9. Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante

1. Un différend lié aux dispositions du présent Accord, en ce qui concerne un investissement entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante, est dans la mesure du possible résolu à l'amiable par des consultations.

2. Si les consultations ne débouchent pas sur une solution dans les six mois qui suivent la date de la notification écrite, chacune des Parties peut soumettre le différend aux organismes suivants:

a) la juridiction nationale de la Partie contractante, sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé; ou

b) un arbitrage international; auquel cas les parties ont le choix entre:

i) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi aux termes de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington, D.C. le 18 mars 1965;

ii) un tribunal spécial constitué conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

3. Une fois que l'autre partie a expressément accepté le choix et que le différend a été soumis à une des instances décrites aux alinéas a), b,i) et b,ii du paragraphe 2 ci-dessus, le choix est définitivement entériné.

4. Une Partie contractante, qui est partie à un différend, ne peut à un moment quelconque de la procédure présenter comme moyen de défense son immunité ou le fait que l'investisseur a reçu une compensation au titre d'un contrat d'assurance couvrant la totalité ou une partie des dommages ou pertes subis.

5. Le tribunal d'arbitrage détermine, sur la base du présent Accord et d'autres accords pertinents entre les Parties contractantes, les conditions d'un arrangement particulier qui peut avoir été conclu au sujet de l'investissement, la législation de la Partie contractante qui est partie au différend, y compris les dispositions sur le règlement des conflits et tous autres principes et règlements de droit international susceptibles d'être appliqués.

6. Les décisions du tribunal sont définitives et contraignantes pour les parties au différend. Chaque Partie contractante les exécute conformément à sa propre législation.

Article 10. Règlement des différends entre les Parties contractantes

1. Les différends entre les Parties contractantes, liés à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord, sont réglés par des négociations au niveau diplomatique.

2. Si les Parties contractantes ne peuvent parvenir à un accord dans les six mois qui suivent le début du différend, la question est, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, soumise à un tribunal d'arbitrage composé de trois membres. Chaque Partie contractante désigne un arbitre et ces deux arbitres nomment le Président qui est un ressortissant d'un État tiers.

3. Si une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre ou n'a pas donné suite à l'invitation de l'autre Partie contractante de procéder à cette désignation dans les deux mois, l'arbitre est nommé, à la demande de ladite Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

4. Si les deux arbitres ne peuvent parvenir à un accord sur le choix du Président dans les deux mois qui suivent leur désignation, le Président est nommé, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

5. Si, dans les cas spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'accomplir ladite fonction ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, la nomination est faite par le Vice-président, et si ce dernier se trouve également empêché ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, la désignation est faite par le doyen des juges de la Cour, qui n'est ressortissant d'aucune des Parties contractantes.

6. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais occasionnés par son arbitre et ceux de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais afférents au Président et les autres coûts sont en principe partagés à égalité entre les Parties contractantes.

7. Le tribunal établit son règlement intérieur.

8. Les décisions du tribunal sont définitives et contraignantes pour les Parties contractantes.

Article 11. Dispositions supplémentaires

Chaque Partie contractante respecte à tout moment les engagements qu'elle a pris en ce qui concerne les investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante.

Si, à un moment quelconque, maintenant ou plus tard, la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou leurs obligations mutuelles résultant du droit international, indépendamment du présent Accord, contient une mesure ou une disposition générale ou spécifique, aux termes de laquelle les investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus favorable que celui qui est prévu dans le présent Accord, ladite règle l'emporte sur celle établie par le présent Accord.

Tous les termes qui ne sont pas définis dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribuée dans la législation applicable de chaque Partie contractante.

Article 12. Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'Accord

Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite, par laquelle les Parties contractantes se sont informées par écrit et par la voie diplomatique qu'elles ont accompli les formalités constitutionnelles nécessaires pour l'approbation de l'Accord dans leurs pays respectifs. Il sera valide pendant dix (10) ans.

Au cas où l'une ou l'autre Partie contractante décide de mettre fin au présent Accord, elle doit notifier à l'autre sa décision par écrit et par la voie diplomatique au moins douze (12) mois avant l'expiration de la période de validité en cours. Sinon, le présent Accord sera renouvelé pour une période indéfinie. A ce stade, les Parties contractantes pourront se notifier à tout moment par écrit et par la voie diplomatique leur décision de mettre fin à l'Accord qui cessera d'être valide douze (12) mois après la réception de cette notification écrite.

En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date de dénonciation du présent Accord, les articles 1 à 11 demeurent en vigueur pendant dix ans après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Asunción le 4 mai 2001 en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :

Pour le Gouvernement de la République de la Bolivie :